GRISUR
Grupo de Información
y Solidaridad Uruguayo
Case Postale 92
1211 Genève 4
SUISSE

No. 104

29 de marzo de 1980

INFORMACIONES

Compte No. 12-14847

1. COMISION DE DERECHOS HUMANOS:
EL SECRETARIO GENERAL DE LA
ONU MANTENDRA NUEVOS CONTACTOS
CON EL GOBIERNO URUGUAYO

El 6 de marzo, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, adoptó una resolución sobre la situación en Uruguay, en la

que se establece que el Secretario General de la ONU prosiga los contactos directos con el gobierno uruguayo a fin de mantener informada a la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Pese a que un Grupo Especial encargado de examinar todas las informaciones referentes al caso uruguayo había recomendado una medida mucho más enérgica contra la dictadura -el nombramiento de un Relator Especial para que estudie a fondo la situación en el terreno (Ver "Informaciones" No. 103)- la Comisión adoptó esta otra resolución -redactada en términos similares a los del año pasado- a propuesta de la delegación de Argentina.

La decisión adoptada tuvo 15 votos a favor, 8 en contra y 17 abstenciones, (estuvieron ausentes Benin, Chipre y Zambia). Votaron a favor: Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Grecia, República Federal de Alemania, Francia, Canadá, Brasil, Egipto, India, Marruecos, Perú, Filipinas y Uruguay. Se abstuvieron: Argelia, Australia, Burundi, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Etiopía, Irán, Iraq, Costa de Marfil, Jordania, Holanda, Nigeria, Pakistán, Senegal, Siria y Yugoslavia. Votaron en contra -por considerar que se debía aplicar la medida propuesta por el Grupo Especial: Bulgaria, Bielorrusia, Cuba, Ghana, Mongolia, Panamá, Polonia y la Unión Soviética.

Los debates sobre el caso uruguayo insumieron varias sesiones secretas de la Comisión. En el curso de los mismos, algunos delegados se pronunciaron enérgicamente contra la dictadura, entre ellos el de Panamá, quién expresó su acuerdo en impulsar medidas más severas de las que estaban en discusión. En cuanto a la posición del representante de Estados Unidos, terminó acompañando la propuesta de la delegación argentina, pese a que en forma privada había manifestado que brindaría su apoyo a la recomendación del Grupo Especial, en el sentido de nombrar un Relator Especial.

La decisión de que se mantengan los contactos con el Secretario General de la ONU, fue recibida por la dictadura con indisimulada satisfacción. La eventualidad de que se aprobara el nombramiento de un Relator Especial llegó a preocupar mucho a la delegación oficial uruguayo, a tal punto, que votó la propuesta argentina a pesar de que mantiene en estudio el caso uruguayo, lo que implica reconocer que existe un cuadro flagrante de violación de los derechos humanos. La resolución adoptada sobre Uruguay, es con todo, la más dura de las aplicadas a los países estudiados en forma confidencial, y en ningún momento se cuestionó la necesidad de mantener el caso uruguayo en el temario de la Comisión. Mientras tanto, el Canciller Folle Martínez, definió la posición uruguayo respecto al nombramiento de un Relator Especial: "nuestro gobierno lo rechaza -dijo el Ministro- por obvios motivos de

salvaguarda de la soberanía nacional y de su jurisdicción doméstica."

2. NUEVO DICTAMEN DEL COMITE DE LIBERTAD SINDICAL DE LA OIT SOBRE LA SITUACION URUGUAYA

El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, reunido entre los días 4 y 7 de marzo

en Ginebra, aprobó un nuevo informe del Comité de Libertad Sindical relativo a la situación sindical uruguaya.

El informe del Comité contiene diversas consideraciones sobre el Proyecto de Ley Sindical que en su forma final fue enviado por el gobierno uruguayo al Comité de Libertad Sindical luego de su última reunión de noviembre de 1979 (ver "Informaciones" No. 101).

Los siguientes párrafos corresponden a la parte del informe dedicado al examen de dicho proyecto de ley.

"17. El Comité ha examinado el proyecto de ley sobre asociaciones profesionales y comprueba que este proyecto difiere muy poco del anteproyecto que había examinado en su reunión de febrero de 1979. En estas condiciones, el Comité lamenta que la mayor parte de los comentarios que formuló en esa ocasión no se hayan tenido en cuenta en la elaboración del proyecto de ley. El Comité estima necesario recordar ciertos principios y consideraciones que había expresado cuando examinó el anteproyecto, acerca de las disposiciones que han sido mantenidas en el proyecto de ley.

18. En lo que concierne a la constitución de organizaciones, el Comité había señalado que los trabajadores deberían poder decidir si prefieren formar, en el primer nivel, un sindicato de empresa -única posibilidad prevista, salvo excepciones ligadas al número de trabajadores- u otra forma de agrupamiento a la base, tal como un sindicato de industria o de oficio. A este respecto, el Comité observa que el artículo 6 del proyecto continúa situando el cuadro del sindicato de base en la empresa y que por otra parte, el artículo 3 permite constituir asociaciones profesionales de obreros, empleados, de técnicos o de personal de dirección. No se desprende con claridad si esta última disposición, que no figuraba en el anteproyecto, permitiría constituir organizaciones por categorías profesionales agrupando a varias empresas o si, por el contrario, sería imposible constituir, al nivel de una empresa, un sindicato reagrupando a trabajadores pertenecientes a las diferentes categorías de asalariados. De manera general, el Comité considera que disposiciones que limiten la esfera de actividad posible de los sindicatos pueden constituir una violación del derecho de los trabajadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes, según está previsto en el artículo 2 del Convenio núm. 87.

19. En lo que se refiere a las condiciones de elegibilidad de los dirigentes sindicales, el Comité recuerda que la obligación de estos últimos de formular una declaración de fe democrática podría dar lugar a abusos. En efecto, el proyecto no aclara qué actos concretos son considerados como violatorios de la fe democrática, con lo que se hace imposible un verdadero control judicial de la aplicación de esta disposición. Además, mediante la combinación de los artículos 4 y 5 del proyecto, los dirigentes sindicales deben pertenecer a la rama de actividad representada por el sindicato desde por lo menos dos años, lo que impone, en opinión del Comité, restricciones al derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus representantes sindicales.

20. De la misma manera que el anteproyecto, el proyecto reglamenta de manera muy minuciosa diversas cuestiones relativas a la administración interna de los sindicatos: voto obligatorio en las elecciones y plebiscitos (artículos 15 d) y 25), presentación de informes sobre las actividades de los sindicatos a cualquier pedido por las autoridades (artículo 22 a)); duración máxima de las asambleas sindicales (artículo 24); organización obligatoria de plebiscitos para el examen de proyectos de convenios colectivos y en los otros casos previstos por la reglamentación (artículo 26); suspensión de la afiliación de un miembro que no haya tomado parte en un voto (artículo 27); responsabilidad, salvo en ciertos casos previstos en el proyecto, de los sindicatos de grado inferior en lo relativo a las decisiones de las organizaciones de grado superior a las cuales están afiliados (artículo 28); formalidades que hay que realizar ante el Ministerio del Trabajo para las elecciones y plebiscitos (artículo 34).

21. El Comité había recordado acerca de estas disposiciones que el Convenio núm. 87 garantiza, entre otros, el derecho de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. El Comité no puede sino insistir de nuevo sobre la importancia que atribuye a estas normas y al principio según el cual las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención de naturaleza a limitar este derecho o a entorpecer el ejercicio legal.

22. El Comité toma nota con interés que la disposición del anteproyecto que prohibía toda referencia a la política en los estatutos de las organizaciones ha sido modificada. En efecto, en virtud del artículo 15 del proyecto, sólo los actos que tengan carácter eminentemente político están prohibidos. El Comité estima que la conformidad de esta disposición con los principios de la libertad sindical dependerá esencialmente de la aplicación práctica que se haga de ella."

El informe señala más adelante que el Comité decidió encargar a su Presidente la tarea de tomar contacto con los representantes del gobierno uruguayo en el Consejo de Administración a fin de que se adopten "las medidas más apropiadas para llegar rápidamente a la solución de las cuestiones planteadas."

La parte relativa a las recomendaciones del informe del Comité de Libertad Sindical expresa textualmente:

"En estas condiciones, el Comité recomienda al Consejo de Administración que:

- a) en lo que concierne al proyecto de ley sobre asociaciones profesionales:
 - i) exprese su preocupación de que el proyecto difiere muy poco del anteproyecto que el Comité había examinado en su reunión de mayo 1979;
 - ii) recuerde una vez más a la atención del Gobierno los principios y consideraciones expuestos en los párrafos 17 a 22 supra, referentes a disposiciones sobre la libre constitución de sindicatos, las condiciones de elegibilidad de los dirigentes y la reglamentación de diversos asuntos que incumben a la administración interna de los sindicatos;
 - iii) exprese la firme esperanza de que se tendrán en cuenta estos principios y consideraciones en la versión definitiva de la ley;

- iv) ruegue al Gobierno mantenga al Comité informado de toda evolución que intervenga al respecto;
- b) en lo que se refiere a la detención de sindicalistas:
 - i) tome nota con interés que ciertos sindicalistas han recobrado la libertad;
 - ii) exprese, sin embargo, su preocupación sobre el hecho de que ciertas personas esperan, a veces desde hace mucho tiempo, ser juzgadas por los tribunales y señale a la atención del Gobierno los principios mencionados en el párrafo 29 supra, en particular aquéllos según los cuales toda persona detenida debería ser objeto de un procedimiento judicial regular y ser presentada en el plazo más breve ante el juez competente;
 - iii) ruegue al Gobierno que continúe enviando informaciones sobre la situación de los sindicalistas mencionados por los querellantes;
- c) que tome nota de que el Gobierno acaba de suministrar ciertas observaciones sobre otros alegatos y que el Comité se propone examinarlas en su próxima reunión;
- d) tome nota de este informe provisional."

Cabe destacar que en el curso de los debates sobre el caso uruguayo -los cuales insumieron prácticamente la mitad del tiempo designado por el Consejo de Administración a los temas considerados por el Comité de Libertad Sindical- representantes del grupo de trabajadores propusieron que de no llegarse a un acuerdo entre el Presidente del Comité de Libertad Sindical y el gobierno uruguayo se cree una comisión especial encargada de estudiar en el terreno la situación sindical.

Esta comisión se integraría con un Director General Adjunto y un representante de cada sector -gobiernos, empleadores y trabajadores- extendiendo su campo de acción a otros países del Cono Sur de América Latina. Esta proposición recibió una favorable acogida del presidente del grupo de empleadores y de varios delegados gubernamentales, entre ellos los de Francia, España y Suecia.

3. COMITE ESPECIAL DE LA UNION
INTERPARLAMENTARIA FORMULA
ACUSACIONES CONTRA LA DICTADURA

La situación de los derechos humanos en Uruguay fue examinada en profundidad por un Comité Especial de la Unión

Interparlamentaria cuyos trabajos se realizaron entre los días 10 y 13 de marzo.

Este Comité, que fuera creado por mandato del Consejo Interparlamentario en abril de 1979, está también abocado al estudio de las situaciones en Chile y Argentina. Entre sus miembros figuran parlamentarios de Bélgica, Checoslovaquia, Costa Rica, México y Senegal (los antecedentes sobre el tratamiento del caso uruguayo en la Unión Interparlamentaria pueden verse en los Nos. 97, 99 y 100 de "Informaciones").

Conforme a la decisión del Consejo Interparlamentario, el Comité recogió pormenorizados informes y testimonios de representantes de organizaciones internacionales y de personalidades invitadas. Por Uruguay asistieron los Senadores Wilson Ferreira Aldunate, Enrique Rodríguez y Enrique Erro. Participaron también en los trabajos del Comité, representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Refugiados, de la OEA y de la Comisión Internacional de Juristas. Otras organizaciones como la OIT, UNESCO y Amnesty International enviaron sus respectivos informes.

Los gobiernos de los países aludidos fueron invitados a delegar sus representantes ante el Comité, pero ninguno de ellos aceptó tal invitación.

Al término de la reunión, el Comité adoptó un informe con recomendaciones sobre los tres países mencionados, el que deberá ser considerado en el próximo período de sesiones del Consejo Interparlamentario a celebrarse en Oslo, en abril próximo.

En el caso uruguayo, el Comité examinó la evolución de la situación desde su último informe de julio de 1979, llegando a la conclusión de que "la situación de los derechos humanos no ha mejorado fundamentalmente" desde esa fecha.

El informe enumera las principales violaciones de los derechos humanos que se cometen en el Uruguay. Menciona el plan de "institucionalización" programado por la dictadura señalando que "no ofrece garantías en lo que concierne al respeto de los derechos políticos". Asimismo expresa que "a pesar de las recomendaciones formuladas por el Consejo en Caracas, gran número de gobiernos continúan otorgando una ayuda financiera y militar al gobierno uruguayo".

A continuación se transcriben las recomendaciones que sobre el caso uruguayo han sido formuladas por el Comité Especial para la próxima reunión del Consejo Interparlamentario:

"El Comité Especial recomienda al Consejo Interparlamentario que ruegue:

I. Al Gobierno del Uruguay:

1. que restablezca inmediatamente el Estado de derecho, derogando los Actos Institucionales y dando plenos efectos a los Pactos Internacionales de derechos humanos, que Uruguay ratificó el lro. de abril de 1970;
2. que restablezca los derechos y garantías constitucionales
3. que garantice el carácter realmente democrático del referéndum sobre la nueva Constitución previsto para 1980 y de las elecciones generales para 1981; para este fin, que restablezca la legalidad y la plena libertad de todos los partidos políticos, los derechos políticos de todos los ciudadanos y la libertad de reunión y de expresión,
4. que devuelva al Poder judicial la totalidad de su independencia, gravemente limitada por la legislación actual;
5. que ponga fin a la práctica de la tortura y a las persecuciones arbitrarias, y que persiga y castigue a los responsables de dichos actos; que humanice el régimen carcelario;
6. que ponga en libertad a los presos políticos o que respete su derecho a ser juzgados según un procedimiento equitativo y conforme a las disposiciones del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos;
7. que restablezca plenamente la libertad de opinión y de expresión, y que ponga en libertad a los periodistas encarcelados;
8. que restablezca plenamente la libertad sindical y el derecho de asociación, y que ponga en libertad a los sindicalistas detenidos;

9. que anule las restricciones en el campo de la educación, de la ciencia y de la cultura, y que permita a los profesores, investigadores y artistas regresar al Uruguay; que ponga en libertad a los que se hallan detenidos,

II. A los Grupos Nacionales:

1. que soliciten a sus Gobiernos que denuncien ante los foros internacionales las violaciones de los derechos humanos de que es responsable el Gobierno uruguayo, en particular la práctica sistemática de la tortura, y que presionen al Gobierno uruguayo para que ponga fin a esta situación;
2. que pidan a sus Gobiernos que no proporcionen ayuda financiera al Gobierno del Uruguay, sin perjuicio de la ayuda humanitaria que puedan prestar al pueblo uruguayo."

4. MODIFICACIONES EN LA LEY ORGANICA MILITAR

El 5 de marzo, el Consejo de Estado aprobó una reforma de la Ley Orgánica Militar, por la cual es aumentado el número de integrantes de la Junta de Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas y se deja sin efecto el límite de edad como causal de retiro obligatorio para los grados de General y sus equivalentes.

El artículo 1ro. de la ley aprobada establece en 16 el número de Oficiales Generales del Ejército y en 6, los efectivos de Oficiales Generales para cada una de las restantes armas, incluyendo la vacante correspondiente al grado que debe ostentar el Comandante en Jefe de cada fuerza.

Con anterioridad a la aprobación de esta reforma, en el Ejército ya habían sido promovidos dos nuevos Generales, por lo que sólo deberá producirse un ascenso al grado de Contraalmirante en la Armada y al de Brigadier General en la Fuerza Aérea. (Cabe señalar que en el número anterior de "Informaciones" erróneamente se situó en 15 y no en 16, el total de miembros de la Junta de Oficiales Generales del Ejército; en la nómina de Generales que se publicó faltó mencionar al Gral. Manuel Nuñez).

Por otro lado, el artículo 4o. de la reforma aprobada, elimina el límite de 60 años de edad para la permanencia en los grados de Teniente General, General y sus equivalentes. Esta disposición entrará a regir para quienes accedan a esos grados a partir de 1981. Para ellos, la única causal de retiro obligatorio será el cumplimiento de ocho años en el grado, por lo que el tope de edad quedó fijado en 63 años teniendo en cuenta que al cumplirse 55 años en grado de Coronel o su equivalente, se debe ascender o pasar a retiro obligatorio.

5. ¿BASE MILITAR DE EE.UU EN EL URUGUAY ?

Estados Unidos habría solicitado al gobierno uruguayo la cesión de un territorio en su costa atlántica para la instalación de una base de aprovisionamiento y reabastecimiento de sus tropas. El pedido habría sido formulado por el Subsecretario Adjunto para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, Samuel D. Eaton, durante la visita que éste realizara a Montevideo a mediados de enero, según informa un cable de la Agencia Prensa Latina fechado el 21 de febrero en Buenos Aires.

De acuerdo a esta información, pese a que esta solicitud habría contado con la aceptación del Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Luis V. Queirolo, del Comandante en Jefe de la Armada, Vicealmirante Hugo Márquez y del Brig. Gral. José D. Cardozo, habría sido rechazada por una mayoría de integrantes de la Junta de Oficiales Generales, en una reunión llevada a cabo en forma secreta en Santa Teresa. La posición contraria al establecimiento de una base habría sido sostenida por los Comandantes de las cuatro Divisiones de Ejército (Generales A. Raymunde, B. Hontou, H. Linares Brum y J. C. Rapella) y por los Generales Y. Trinidad, J. Siqueira, J.C. Bonelli y P. Aranco.

Según indica el cable, el enviado norteamericano habría expresado que la concesión de una base militar, haría variar de inmediato la política de Estados Unidos y de los países del Mercado Común Europeo respecto al Uruguay, señalando además que se obtendrían también beneficios económicos, por los gastos y el consumo que realizaría el personal de la Base.

La Junta de Oficiales Generales habría informado al gobierno norteamericano que Uruguay no está dispuesto a conceder bases militares, ni a ofrecer un territorio o sitio específico para abastecimiento de ninguna fuerza extranjera. Al mismo tiempo, los militares habrían sostenido entrevistas con dirigentes políticos de los Partidos Nacional y Colorado para informarles del planteamiento de Eaton y de la posición adoptada por las Fuerzas Armadas.

Por su parte, la Dirección Nacional de Relaciones Públicas, DINARP, emitió un comunicado oficial el pasado 27 de febrero, desmintiendo la existencia de un tal pedido. La DINARP adjudica estas versiones a "la campaña que desde el exterior desarrolla el marxismo internacional" y "los frustrados profesionales de la política que debieron huir de nuestro país". El "oscuro fin" de estas informaciones, dice el comunicado oficial, es "enturbiar las tradicionalmente amistosas relaciones entre Uruguay y Estados Unidos".

6. REPRESION EN "El viernes 22 de febrero se realizó por 18
"LAS LLAMADAS" de julio el desfile de las llamadas. Como siempre, con mucha gente. Después, casi de golpe, espontáneamente, un grito que pasó a ser coreado por cientos de personas: "Queremos libertad", "Queremos libertad". Fue como si a los policías los tocaran con fuego. Y respondieron atacando indiscriminadamente -a palo limpio- a la gente. A un muchacho, que hirió ron caer, a palos, frente a la tienda Saúl, lo pateaban en el suelo entre 4 policías. Se lo llevaron sangrando y sin conocimiento. Otra persona cayó frente a El Galpón. Hubo varios detenidos y diversos heridos de menor entidad, incluso niños, entre la gente que saltaba, huyendo, por encima de las sillas que se ponen en cada corso. Todo esto no duró más de media hora. Pero fue sin duda demostración suficiente de que hay gente lo suficientemente harta como para estallar cuando menos se piensa y hasta cuando la ocasión es poco propicia." (Extracto de una carta enviada desde Montevideo por un anónimo testigo de lo sucedido).

7. RECLAMOS POR - El 27 de febrero, el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay, SIJAU, organizó un acto en la Asamblea Nacional de Francia con el fin de denunciar la actual situación de detención del General Liber Seregni y reclamar su libertad inmediata.

El acto reunió a representantes de diversos sectores de la oposición a la dictadura, y en el mismo intervino el Senador Wilson Ferreira Aldunate, quien entre otras cosas expresó: "Seregni ha sido mi adversario. No mi enemigo. Yo afirmo que no existe hoy en el mundo un caso más vergonzoso, no hay prisionero de conciencia en el sentido más puro de la expresión que él. Está detenido por la única razón de que es un militar de honor, y esto es difícil de soportar para el resto de los militares... (Seregni) es la demostración de que el ser humano es capaz de resistir todas las sevicias en defensa de sus convicciones".

En el encuentro también intervino el Almirante retirado francés, Antoine Sanguinetti quien señaló que la figura de Seregni es "un ejemplo para los militares del mundo entero, también una demostración de que son muchos los militares dispuestos a luchar contra el facismo y la demencia totalitaria".

- Los días 29 de febrero y 1^o de marzo, se reunieron en la ciudad de Panamá, representantes de gobiernos y partidos políticos de Costa Rica, Ecuador, Grenada, México, Nicaragua, Venezuela y Panamá, bajo la convocatoria del Presidente de este último país, Dr. Arístides Royo, con el fin de examinar la vigencia de los derechos humanos en América Latina y en particular en Uruguay.

En la reunión se acordó intensificar las gestiones tendientes a lograr la libertad del Gral. Liber Seregni. Por su lado, el representante del Presidente panameño, Dr. Jorge Ritter, reveló que el gobierno de su país concedió la orden Vasco Nuñez de Balboa -la más alta condecoración panameña- al General Seregni, anunciando que se harían gestiones ante el gobierno uruguayo para que Seregni pueda viajar a Panamá para recibir dicha condecoración.

Por otra parte, a mediados de febrero, el Embajador de Panamá en Montevideo, Lic. Elio Ortiz, entregó al Dr. Aparicio Méndez una carta que le remitiera el Presidente panameño, con la cual se habrían iniciado nuevas gestiones a nivel presidencial para lograr la liberación del General Seregni.

8. PRUEBAS DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD

El 10 de marzo, cerca de 4.400 alumnos inscriptos para comenzar sus estudios en la Universidad tras finalizar el ciclo de enseñanza secundaria, debieron enfrentarse a un examen de ingreso eliminatorio. Se trata de una prueba de selección que acaba de aplicarse por primera vez en el marco de una serie de medidas limitacionistas que han venido imponiendo las autoridades universitarias.

El examen de ingreso consistió en dos pruebas de conocimiento referidas a dos materias básicas de la disciplina elegida por el estudiante y una prueba de "aptitud" basada en la interpretación de la lectura de un texto. Toda la prueba es efectuada por escrito y su aprobación se obtiene por puntaje.

Con la entrada en vigor de este sistema de "filtro", se presentaron como aspirantes a la Universidad 2148 estudiantes menos que en 1972, aproximadamente un 35 por ciento, vale decir que la sola existencia de la prueba eliminatoria excluyó a la tercera parte del total de alumnos que ingresaron el año pasado.

9. LA GUERRA CONTRA LOS PANTALONES VAQUEROS Y EL PELO LARGO

Una de las principales preocupaciones de las autoridades de enseñanza secundaria

en estos últimos años, ha sido la de dictar normas sobre la presentación y aspecto de los estudiantes en los centros educativos, desde el largo del cabello para los hombres hasta lo ajustado que pueden usar los pantalones las mujeres. Ahora son los jefes de la Universidad del Trabajo los que han vuelto a incursionar en cuestiones relativas a atuendos y aspecto físico de los alumnos.

En efecto, de acuerdo al nuevo reglamento que comenzó a regir a partir del 13 de marzo, los estudiantes de los distintos centros docentes de la UTU deben presentarse con el "cabello corto y correctamente peinado" no pudiendo usarlo en forma rizada tipo "Africa Look". Se les prohíbe asimismo el uso de patillas por debajo del lóbulo de las orejas; y lo que es más: el bigote no puede pasar más abajo de la comisura de los labios, y la barba debe estar completamente rasurada. En cuanto a las alumnas, si tienen el cabello largo, deben usarlo recogido.

Por lo que respecta al uniforme -minuciosamente especificado por el nuevo reglamento- establece que ya no se admite el uso de camisas blancas sino celestes (¿?). Las mujeres han sido "beneficiadas" con la autorización de usar pantalones -"holgados" por supuesto- pero sólo durante el período que va desde el 2 de mayo al 20 de setiembre, con excepción de las celebraciones de fechas patrias, en las que sólo pueden concurrir con polleras.

En ningún caso se permite el uso de pantalones tipo vaquero, medida ésta que también rige para los alumnos de los Liceos Nocturnos. Comentando esta disposición, el diario "El Día" se pregunta "qué sentido extraño le adjudican al vaquero" las autoridades de enseñanza, ya que según dice el matutino "nada tienen que ver con el marxismo (el jean es de los Estados Unidos)..."

Esta obsesión "uniformadora" de los jefes del Consejo de Educación Secundaria, que recae sobre todos los centros del Ciclo Básico o del Bachillerato diversificado -excepto en los Liceos Nocturnos donde no hay establecido un uniforme pero es obligación usar cuello y corbata- la padecen sobre todo las economías familiares obligadas a gastar sumas escalofriantes por las prendas requeridas. En este sentido baste señalar que si el grupo mayoritario de familias correspondientes a las ocho zonas de mayores ingresos en Montevideo, no percibe un ingreso mayor a N\$ 2.500 según datos proporcionados por GALLUP, piénsese lo que significa para una familia con varios hijos gastar N\$ 966,80 en un uniforme con saco para varón, y N\$ 954,80 en un uniforme de mujer, cifras estas proporcionadas por una encuesta de "El Día".

10. CORRE PELIGRO DE MUERTE RAUL CARIBONI DA SILVA

Raúl Cariboni da Silva, actualmente detenido en el Penal de Libertad, ha sufrido tres infartos a

consecuencia de la tortura, y su vida está en grave peligro.

Según informaciones provenientes desde Montevideo, hasta los propios médicos de la dictadura, como el Jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Militar, Adolfo Fabius, han admitido que si Cariboni no es sometido a una operación quirúrgica en los próximos meses, su salud ya no resistirá una intervención que pueda salvarlo.

Profesor de Historia en Enseñanza Secundaria, Cariboni fue fundador de la Unión de Profesores de Montevideo y de la Federación Nacional de Profesores.

Fue detenido en marzo de 1973 y sometido a todo tipo de torturas. En abril de 1975 y en 1976 volvió a sufrir apremios físicos; en esta última oportunidad estuvo en el Cuartel de Artillería de La Paloma, en Montevideo, adonde fue conducido por la OCOA (Organización de Comandos Antisubversivos).

Cariboni cuenta con la nacionalidad italiana y debido a algunos análisis que se le efectuaron a cuenta de la Embajada de Italia en Montevideo, se pudo determinar con precisión su grave estado de salud. Los profesores Enzo Di Giacomo y Faustino Durante, docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Roma, por encargo de la Asociación de Juristas de Italia, analizaron la documentación clínica relativa a Cariboni y determinaron que su permanencia en la cárcel y las condiciones en las que se encuentra "pueden ser una de las causas provocadoras de una brusca o imprevista evolución mortal".

Las acusaciones formuladas por la Justicia Militar contra el profesor Cariboni son de una total inconsistencia jurídica. Se le acusa, por ejemplo, de haberse conectado en 1972 con una organización para apoyar conflictos sindicales...de haber tenido reuniones con Hugo Cores y Mauricio Gatti, cuando el primero era dirigente bancario y el segundo Profesor de la Escuela de Bellas Artes. Se le acusa también de haber sintetizado unos libros marxistas para discutirlos en reuniones...y por último, se afirma que Cariboni sabía que Gatti y Cores estaban requeridos por las Fuerzas Conjuntas, acusación inadmisibles, desde que ambos dirigentes fueron requeridos después de la disolución del Parlamento, cuando ya Cariboni había sido detenido.

En primera instancia, Cariboni fue condenado a nueve años de prisión. Debido a su quebrantada salud, su abogado solicitó una nueva instancia ante el Tribunal Militar, en la cual el ensañamiento con Cariboni llegó al extremo de que sin ampliarle las acusaciones, le fue aumentada la pena, condenándolo a 15 años.

11. EL FALLECIMIENTO DEL
ING. OSCAR MAGGIOLO

El ex-Rector de la Universidad, Ingeniero Oscar J. Maggiolo, falleció en Caracas, el 10 de marzo.

Su nombre está estrechamente ligado a un largo período de luchas universitarias enraizadas con las más sentidas aspiraciones populares.

Estando al frente del rectorado en los años 1966-1972, Maggiolo contribuyó al desarrollo de una Universidad democrática y autónoma, abierta a los grandes problemas de la realidad nacional. Como profesional, era reconocido internacionalmente como un destacado especialista en ingeniería hidráulica.

En 1973, Maggiolo viajó a la Argentina y de allí se trasladó a Venezuela, donde había fijado residencia.

Actualmente, Maggiolo integraba el Comité Coordinador del Frente Amplio en el Exterior, siendo además su representante en Caracas.